



Consejo Económico y Social

Distr. general
30 de enero de 2003
Español
Original: inglés

Comisión de Estupefacientes

46º período de sesiones

Viena, 8 a 17 de abril de 2003

Temas 3 y 11 del programa provisional*

Seguimiento del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General: panorama general y progresos logrados por los gobiernos en el cumplimiento de las metas y los objetivos para los años 2003 y 2008 establecidos en la Declaración política aprobada por la Asamblea en su vigésimo período extraordinario de sesiones

Debate general de la serie de sesiones a nivel ministerial: evaluación de los progresos realizados y las dificultades encontradas en el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones

Segundo informe bienal sobre la aplicación de los resultados del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la lucha en común contra el problema mundial de las drogas

Informe del Director Ejecutivo

Adición

Medidas contra el blanqueo de dinero

* E/CN.7/2003/1.



Índice

<i>Capítulo</i>	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1	3
II. Normas internacionales sobre el blanqueo de dinero	2-11	3
III. Iniciativas mundiales y regionales.....	12-16	5
IV. Medidas adoptadas por las Naciones Unidas contra el blanqueo de dinero.....	17-19	6
V. Medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el blanqueo de dinero según los informes facilitados en el cuestionario bienal para el segundo período de presentación de informes en (2000-2002).....	20-54	7
A. Medidas legislativas	21-39	7
B. Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de dinero en las entidades financieras	40-46	14
C. Medidas para la investigación y el procesamiento en casos de blanqueo de dinero	47-50	18
D. Cooperación internacional	51-54	19
VI. Recomendaciones	55-61	21
Figuras		
I. Estados en que está tipificado como delito el blanqueo del producto resultante del tráfico de drogas, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		7
II. Estados en que la legislación dio lugar a investigaciones, procesamiento o condenas, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		8
III. Estados en que la legislación prevé el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto del tráfico de drogas, conforme a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		10
IV. Estados en que el blanqueo de dinero se considera un delito que puede dar lugar a extradición, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		13
V. Estados que han puesto en práctica el principio de “conocer al cliente”, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		15
VI. Estados que han eliminado impedimentos a las investigaciones criminales relacionadas con el secreto bancario, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		16
VII. Estados que han establecido un servicio central de inteligencia financiera para reunir y analizar informes e información confidencial sobre casos sospechosos de blanqueo de dinero, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		18
VIII. Estados que han firmado tratados, acuerdos o memorandos o cartas de entendimiento con otros Estados, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002		20

I. Introducción

1. La Asamblea General, en su resolución S-20/4 D de 10 de junio de 1998, reconoció que el problema del blanqueo de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y de otros delitos graves ha llegado a constituir una amenaza tal para la integridad, seguridad y estabilidad de los sistemas financieros y comerciales del mundo e incluso para las estructuras de gobierno, que su solución requiere la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional para denegar refugio seguro a los criminales. En la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, (resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo) la Asamblea se comprometió a realizar esfuerzos especiales para combatir el blanqueo de dinero asociado al tráfico de drogas y recomendó además que los Estados que todavía no lo hubieran hecho promulgaran legislación y establecieran programas nacionales contra el blanqueo de dinero antes de finales de 2003, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, así como con las medidas para la lucha contra el blanqueo de dinero aprobadas en el vigésimo período extraordinario de sesiones (en la resolución S-20/4 D de la Asamblea)¹.

II. Normas internacionales sobre el blanqueo de dinero

2. El régimen internacional para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo comprende un marco de convenciones y normas internacionales que se revisan y enmiendan para reflejar las prácticas óptimas en esta esfera. Órganos internacionales u organizaciones profesionales pueden publicar información sobre las prácticas óptimas en relación con las nuevas tendencias a medida que éstas surgen. A menudo, dichas prácticas se incorporan finalmente a un marco normativo más oficial.

3. La Convención de 1988 fue el primer tratado internacional que tipificó como delito el blanqueo de dinero. Aunque su ámbito no va más allá de los delitos relacionados con las drogas, la Convención de 1988 estableció un marco jurídico que ha servido de base para la elaboración de políticas en esa esfera. Posteriormente, las normas y marcos internacionales elaborados en virtud de la Convención han ampliado su campo de aplicación a todos los delitos graves.

4. En 1988, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (denominado entonces Comité de Basilea sobre Reglamentación y Supervisión Bancaria) publicó una declaración sobre la prevención de la utilización criminal del sistema bancario con fines de blanqueo de dinero, en la que reconocía los riesgos de mala utilización de las instituciones financieras con fines delictivos, e incluía directrices para los bancos con respecto a la identificación de los clientes y a la necesidad de cumplir la legislación contra el blanqueo de dinero y de cooperar con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en esa esfera.

5. Las 40 recomendaciones adoptadas en 1990 por el Grupo de Acción Financiera siguen siendo el plan maestro de las medidas necesarias para luchar contra el blanqueo de dinero. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Grupo de Acción Financiera añadió ocho recomendaciones especiales que abordaban cuestiones relacionadas concretamente con la financiación del terrorismo.

En 2003 el Grupo llevará a cabo una revisión completa de sus 40 recomendaciones, teniendo en cuenta las medidas que hayan resultado eficaces contra el blanqueo de dinero desde que se efectuó la última revisión de las recomendaciones en 1996.

6. La Directiva 91/308/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 10 de junio de 1991², relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, que tuvo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención de 1988, otorgó a los Estados Miembros la facultad discrecional de ampliar las disposiciones de la Directiva a “cualquier otra actividad delictiva”. La referencia a las disposiciones de la Convención de 1988 relacionadas con las drogas, hizo necesario enmendar dicha Directiva de manera que obligara a los Estados Miembros a contar con disposiciones legislativas que abarcaran todos los delitos graves. La Directiva 91/308/CEE fue enmendada el 4 de diciembre de 2001 mediante la Directiva 2001/97/CE³ del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

7. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Asamblea General en su resolución 55/25 de 15 de noviembre de 2000, se asienta en las bases establecidas por la Convención de 1988.

8. En octubre de 2001, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó *Debida diligencia con la clientela de los bancos*⁴, donde recomienda, en particular, intensificar la vigilancia en las relaciones de negocios con “personas del medio político”, es decir, jefes de estado o de gobierno y altos cargos públicos, con el fin de prevenir la corrupción y la malversación de fondos públicos.

9. Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 1373 (2001). En ella, el Consejo, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió que todos los Estados debían, entre otras cosas, prevenir y reprimir la financiación de los actos terroristas, y decidió establecer un comité del Consejo de Seguridad, compuesto por todos los miembros del Consejo, para que vigilara la aplicación de la resolución.

10. El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General en su resolución 54/109 de 9 de diciembre de 1999 entró en vigor el 10 de abril de 2002. Cada Estado Parte en el Convenio debe adoptar medidas apropiadas para la identificación, la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer un acto terrorista (artículo 8).

11. En su resolución 1456 (2003) de 20 de enero de 2003, el Consejo de Seguridad decidió aprobar una declaración sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo. En dicha declaración, el Consejo reafirmó que se debe evitar que los terroristas recurran a otras actividades delictivas como la delincuencia transnacional organizada, el uso y el tráfico ilícitos de drogas, el blanqueo de capitales y el tráfico ilícito de armas.

III. Iniciativas mundiales y regionales

12. Como muestra de su voluntad política de luchar contra el blanqueo de dinero, la comunidad internacional ha emprendido diversas iniciativas multilaterales que pueden servir de marcos legislativos y normativos para que los Estados definan y adopten medidas contra el blanqueo de dinero. Muchos Estados han iniciado una serie de operaciones de autoevaluación y de “evaluaciones mutuas” realizadas a través de órganos regionales de lucha contra el blanqueo de dinero, análogos al Grupo de Acción Financiera. Una función esencial de esos órganos es coordinar las evaluaciones mutuas y colegiadas que tienen por objeto vigilar el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones dimanantes de los tratados internacionales y mejorar la coherencia de las medidas adoptadas para combatir el blanqueo de dinero.

13. El enfoque regional ha sido particularmente útil debido a que los Estados vecinos tienen a menudo un mismo idioma, sistema jurídico y cultura, y se encuentran frecuentemente en niveles parecidos de elaboración y aplicación de las políticas. Además, los países de la misma región necesitan cooperar entre sí para combatir la delincuencia transnacional y por tanto es esencial mantener contactos, a nivel político y operacional para garantizar la eficacia de esa cooperación. Asimismo, los órganos regionales ayudan a los Estados a centrar y coordinar la asistencia técnica que prestan a otros Estados que la han solicitado con el fin de desarrollar de sus regímenes de lucha contra el blanqueo de dinero.

14. Entre los órganos regionales que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero cabe citar: el Grupo de Asia y del Pacífico sobre blanqueo de dinero (25 jurisdicciones); el Grupo de Acción Financiera del Caribe (29 jurisdicciones); el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (9 jurisdicciones); el Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero del Consejo de Europa (24 jurisdicciones); y el Grupo contra el blanqueo de dinero de África oriental y meridional (14 jurisdicciones).

15. Algunas organizaciones internacionales, incluidos el Grupo de Acción Financiera, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han elaborado una metodología de evaluación común, que incluye un marco jurídico e institucional y medidas preventivas para el sector financiero, con el fin de evaluar el cumplimiento por los Estados de las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La metodología se basa en las normas publicadas, entre otros, por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, y la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Organizaciones intergubernamentales regionales también han participado en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero. Entre ellas cabe citar: el Equipo intergubernamental de tareas para la lucha contra el blanqueo de dinero en África; el Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero, del Consejo de Europa, con sus programas de evaluación mutua y sus visitas sobre el terreno; la Secretaría del Commonwealth; y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que promovió medidas contra el blanqueo de dinero e introdujo un examen colegiado por sus Estados Miembros de los progresos alcanzados en la puesta en práctica de los programas nacionales contra el blanqueo de dinero y revisó sus reglamentos modelo sobre el control del blanqueo de dinero.

16. Estados y territorios están haciendo grandes progresos en el marco de las mencionadas iniciativas internacionales y regionales para promover y fortalecer las medidas eficaces contra el blanqueo de dinero.

IV. Medidas adoptadas por las Naciones Unidas contra el blanqueo de dinero

17. En 1997, la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito (denominada ahora Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estableció el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero con el fin de dar cumplimiento a los mandatos de las Naciones Unidas contra el blanqueo de dinero basados en la Convención de 1988, y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Oficina es el centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para las cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero y el producto del delito. Proporciona asistencia técnica a los Estados para que desarrollen la infraestructura necesaria para combatir el blanqueo de dinero y puedan así aplicar las disposiciones de los tratados relativas a esta cuestión.

18. El objetivo principal de la prestación de cooperación técnica es ayudar a las autoridades jurídicas, financieras y de represión a desarrollar los marcos jurídicos, la capacidad institucional, la capacitación en investigación financiera y recopilación de inteligencia, las investigaciones y la concienciación. Hay iniciativas concretas que se centran en el fomento institucional, la capacitación, la investigación y la concienciación. En la esfera del desarrollo de marcos jurídicos, la Oficina contra la Droga y el Delito presta asistencia en la elaboración de normas legislativas contra el blanqueo de dinero. La Oficina ha preparado un modelo de legislación que los Estados han utilizado como guía para promulgar o actualizar sus leyes sobre blanqueo de dinero. Por ejemplo, recientemente se ha prestado asistencia para la elaboración de legislación contra el blanqueo de dinero a Andorra, la Federación de Rusia, Georgia, Indonesia, Israel, Kazajistán y el Líbano.

19. La Oficina contra la Droga y el Delito ayuda a los Estados a establecer los mecanismos institucionales necesarios para poder luchar contra las corrientes financieras ilegales. La Oficina apoya el establecimiento de dependencias de información financiera, en el marco de su relación de trabajo con el Grupo Egmont. Se utiliza un sistema especial de mentores para colocar a expertos en posiciones en que puedan prestar asistencia a las nuevas dependencias de información financiera en la solución de los problemas operacionales cotidianos. En particular, el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero presta asistencia a largo plazo a los Estados al proporcionarles mentores que les ayudan a fortalecer la capacidad de la investigación financiera y de los servicios procesales de las jurisdicciones que se ocupan de casos importantes de blanqueo de capitales e incautación de activos. También se imparte formación a las autoridades jurídicas, judiciales, de control financiero y de represión con el fin de mejorar su capacidad para desempeñar sus respectivas funciones en la lucha contra el blanqueo de dinero. Se están haciendo esfuerzos también para ampliar la capacitación a los funcionarios pertinentes del sector privado. Asimismo, se realizan actividades para crear más conciencia en los gobiernos y en el sector financiero acerca del blanqueo de dinero, de su repercusión negativa y de las medidas necesarias para combatirlo.

V. Medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el blanqueo de dinero según los informes facilitados en el cuestionario bienal para el segundo período de presentación de informes en (2000-2002)

20. En la sección V del cuestionario bienal, relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero, se pedía a los Estados Miembros que facilitan información sobre las siguientes cuestiones: a) medidas legislativas; b) medidas para prevenir y detectar el blanqueo de dinero en las entidades financieras; y c) cooperación internacional.

A. Medidas legislativas

1. Legislación que tipifica como delito el blanqueo de dinero

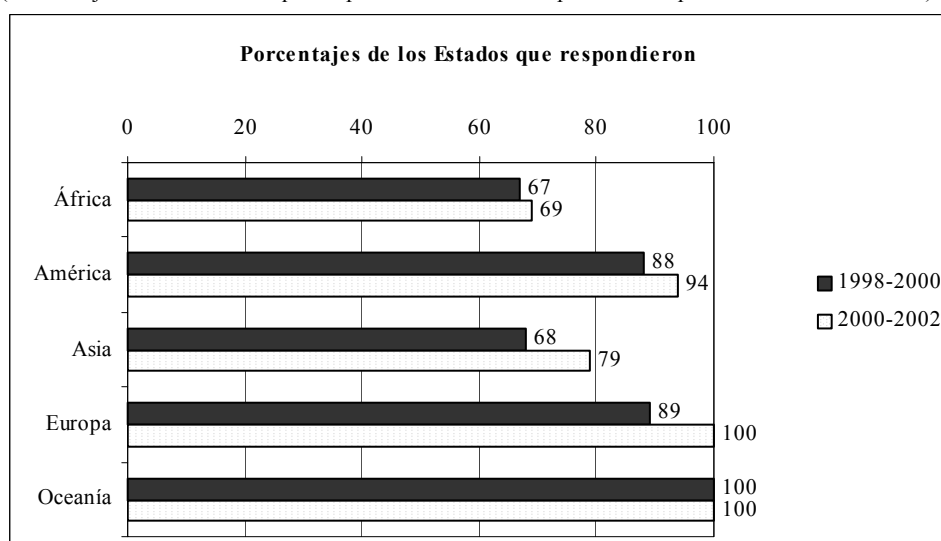
21. Las Partes en la Convención de 1988 están obligadas a considerar el blanqueo de dinero como un delito sancionable y a adoptar las medidas necesarias para que las autoridades puedan identificar, seguir la pista y embargar con carácter preventivo o incautar el producto resultante del tráfico de drogas. Un gran número de Estados han hecho esfuerzos considerables para aprobar y aplicar legislaciones nacionales que tipifican el blanqueo de dinero como delito penal. La mayoría de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (2000-2002) habían aprobado y aplicado leyes nacionales en ese sentido, con arreglo a las disposiciones de la Convención de 1988.

22. La mayoría de los Estados que respondieron a los cuestionarios para los periodos de presentación de informes primero y segundo (80%) indicaron que el blanqueo del producto resultante del tráfico de drogas se consideraba un delito penal en sus jurisdicciones (véase figura I). Otros Estados (11%) comunicaron que estaban en vías de aprobar medidas legislativas para hacer frente al blanqueo del producto resultante del tráfico de drogas, con el fin de cumplir la fecha límite de 2003 establecida por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones. Varios Estados habían aprobado recientemente una nueva legislación o habían enmendado las leyes y normas vigentes sobre el blanqueo de dinero.

Figura I

Estados en que está tipificado como delito el blanqueo del producto resultante del tráfico de drogas, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



2. Consideración del blanqueo del producto de otros delitos graves como delito penal

23. En la mayoría de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (el 79%, por comparación con el 63% en el primer período de presentación de informes), el blanqueo del producto de otros delitos graves se consideraba también un delito penal. Sin embargo, en el 17% de los Estados que respondieron al cuestionario en ambos períodos de presentación de informes esa actividad no se consideraba delito penal. Varios gobiernos (el 11%) notificaron que estaban introduciendo medidas legislativas para hacer frente al blanqueo del producto de delitos graves distintos del tráfico de drogas y cumplir así el plazo límite de 2003 establecido por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones. Se ha avanzado en el cumplimiento del objetivo de que todos los gobiernos aprueben legislaciones nacionales para penalizar el blanqueo de dinero a más tardar en 2003. A fin de cumplir plenamente ese objetivo, los gobiernos que aún no lo hayan hecho deben velar por que antes de finales de 2003 se adopten leyes nacionales, incluidas medidas penales y programas contra el blanqueo de dinero, tal como se recomendó en la Declaración política aprobada por la Asamblea en su vigésimo período extraordinario de sesiones.

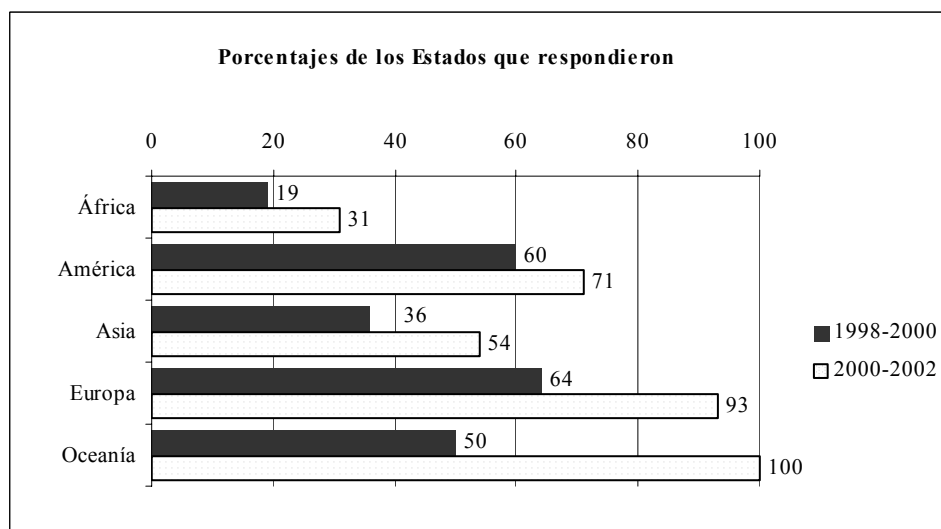
3. Disposiciones legislativas que dan lugar a investigaciones, procesamientos y condenas

24. Los Estados han hecho bastantes progresos en la aplicación efectiva de las legislaciones nacionales que tipifican como delito el blanqueo de dinero. El 67% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes indicaron que sus disposiciones legislativas contra el blanqueo de dinero habían dado lugar a investigaciones, procesamientos o condenas por delitos de blanqueo de dinero cometidos en sus jurisdicciones, en comparación con el 48% en el primer período de presentación de informes. La cooperación regional había contribuido a ese avance (véase la figura II).

Figura II

Estados en que la legislación dio lugar a investigaciones, procesamientos o condenas, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



4. Datos sobre la investigación de casos

25. Se pidió a los Estados que señalaron si sus autoridades competentes contaban con datos estadísticos sobre las medidas legales adoptadas para combatir el blanqueo de dinero, incluidas investigaciones, procesamientos y condenas. El 58% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes notificaron que poseían datos estadísticos sobre las investigaciones de casos de blanqueo de dinero, por comparación con el 48% de los Estados que respondieron el primer período. Algunos Estados indicaron que, o bien no disponían de esos datos o carecían de bases de datos centralizadas para esos casos. Varios Estados y territorios informaron acerca del número de casos investigados en 2001, que variaba considerablemente, de menos de diez en algunas jurisdicciones a centenares en otras. Por ejemplo, en las Bahamas se habían llevado a cabo 39 investigaciones de ese tipo; en Bolivia 115 (de las cuales 59 habían sido notificadas por instituciones financieras y 56 por otras fuentes); en el Brasil 177; en Chile 5; en Chipre 203; en Colombia 345; en Croacia 6; en El Salvador 137; en Eslovaquia 144; en España 1.245; en Estonia 25; en Finlandia 199; en Grecia 840; en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong de China 607; en el Japón 5; en Lituania 193; en Luxemburgo 423; en Omán 10; en el Pakistán 177; en Panamá 1; en Suecia 47; en Trinidad y Tabago 334; y en Venezuela 409.

5. Procesamientos relacionados con el blanqueo de dinero

26. Aproximadamente la mitad de los Estados que respondieron a los cuestionarios para el segundo período de presentación de informes (el 49%, en comparación con el 43% en el primer período) informaron de que sus autoridades contaban con datos estadísticos sobre los procesamientos por delitos de blanqueo de dinero. Varios Estados notificaron también el número de procesamientos entablados durante el pasado año que, como era de prever, era inferior al de las investigaciones. El número de procesamientos notificados variaba de cinco a 2.518. Por ejemplo: en el período 2000-2001 hubo 333 procesamientos en Australia; en 2001, hubo 4 en las Bahamas; 150 en el Canadá; 5 en Chile; 92 en Eslovaquia; 2.518 en los Estados Unidos; 39 en la RAE de Hong Kong de China; 11 en Irlanda; 3 en Lituania; 32 en Nueva Zelandia; 1 en Panamá; 3 en el Paraguay; 1 en la República Checa; en Trinidad y Tabago y 240 en Venezuela.

6. Acopio de datos sobre condenas por delitos de blanqueo de dinero

27. El 45% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes indicaron que poseían datos estadísticos sobre las condenas por delitos de blanqueo de dinero, en comparación con el 38% en el primer período. La misma proporción de Estados (el 45%) indicó que no contaban con esos datos. Al igual que en el caso de las investigaciones y los procesamientos, algunos Estados informaron de que carecían de un sistema de recopilación central de datos sobre las condenas por delitos de blanqueo de dinero. Como era de prever, el número de condenas notificadas, que presentaba grandes variaciones, fue inferior al de las investigaciones o procesamientos notificados. Por ejemplo, el número de condenas por delitos de blanqueo de dinero notificados fue de: 325 en Australia para el período 2000-2001; y, para 2001, de 2 en las Bahamas; 31 en Colombia; 24 en el Salvador; 6 en Eslovaquia; 1.175 en los Estados Unidos; 9 en la RAE de Hong

Kong de China; 3 en Irlanda; 11 en Nueva Zelandia; 1 en la República Checa 1; 7 en Suecia; y 1 en Venezuela.

7. El blanqueo de dinero considerado como delito grave

28. La mayoría de los Estados informantes (el 85%) indicaron que el blanqueo de dinero se consideraba un delito grave en sus jurisdicciones. Algunos Estados, como la Arabia Saudita, Etiopía, Georgia, Jordania, el Paraguay, la República Islámica del Irán y el Sudán comunicaron que en sus jurisdicciones esa actividad no estaba considerada como un delito grave.

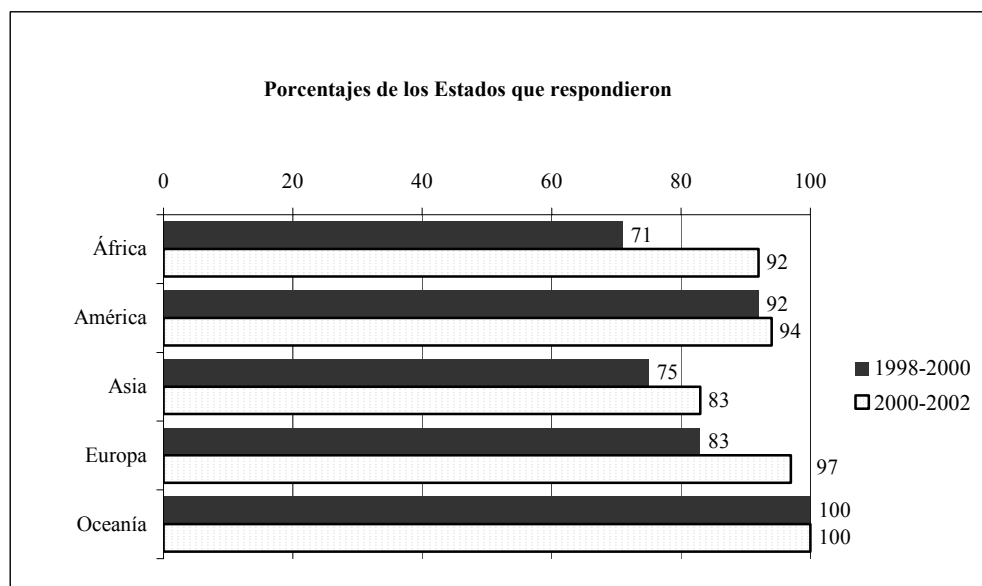
8. Embargo preventivo, incautación o decomiso del producto del tráfico de drogas

29. Se pidió a los Estados que señalaran si sus legislaciones preveían el embargo preventivo, la incautación o el decomiso del producto del tráfico ilícito, de acuerdo con las disposiciones de la Convención de 1988. El 91% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (en comparación con el 80% en el primer período) indicaron que sus leyes y reglamentos nacionales preveían el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto ilícito del tráfico de drogas, de acuerdo con las disposiciones de la Convención de 1988 (véase la figura III). Un número reducido de Estados (el 2%), entre ellos la Arabia Saudita, Burundi, Sri Lanka, Uganda y Yugoslavia, notificaron que su legislación no preveía el embargo preventivo, la incautación o la confiscación del producto del tráfico de drogas. El 6% de los Estados que presentaron el cuestionario no respondieron a esta pregunta.

Figura III

Estados en que la legislación prevé el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto del tráfico de drogas, conforme a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



30. La mayoría de los Estados (el 77%, por comparación con el 61% en el primer período de presentación de informes) notificaron que habían embargado con carácter preventivo, incautado o decomisado el producto de actividades de tráfico de drogas. Algunos Estados como Bangladesh, Botswana, el Chad, Côte d'Ivoire, Etiopía, Georgia, Haití, Indonesia, Kirguistán, el Paraguay, la República Centroafricana, Swazilandia, Ucrania y el Uruguay, comunicaron que a pesar de tener legislaciones que estaban en consonancia con las disposiciones de la Convención de 1988, aun no habían llevado a cabo ningún embargo con carácter preventivo, incautación ni decomisado del producto de actividades de tráfico de drogas.

9. Embargo preventivo, incautación o decomiso del producto de otros delitos graves

31. Los gobiernos han hecho grandes progresos en la aprobación de leyes que permiten la incautación de activos resultantes del blanqueo de dinero relacionado con delitos graves distintos del tráfico de drogas. La mayoría de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (el 75%, por comparación con el 62% en el primer período) habían adoptado medidas para el embargo preventivo, la incautación o el decomiso del producto de delitos graves distintos del tráfico de drogas. Algunos Estados (el 12%), entre ellos la Arabia Saudita, Bangladesh, Bolivia, el Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Indonesia, Jordania, el Pakistán, la República Democrática Popular Lao, el Paraguay, Sri Lanka, Swazilandia, Uganda y el Yemen indicaron que sus disposiciones legislativas nacionales sobre blanqueo de dinero no eran aplicables a delitos graves distintos del tráfico de drogas. El 12% de los Estados no respondió a la pregunta.

32. Se han hecho constantes progresos en el embargo preventivo, la incautación o el decomiso del producto de delitos graves distintos del tráfico de drogas. El 63% de los Estados que respondieron al cuestionario notificaron que habían embargado con carácter preventivo, incautado o decomisado el producto de delitos graves distintos del tráfico de drogas. Varios Estados (el 16%) entre ellos Etiopía, Haití, Malasia, Panamá, la República Centroafricana y Venezuela, indicaron que, a pesar de que contaban con la legislación pertinente, aún no habían llevado a cabo ninguna actividad de ese tipo.

10. Compilación de estadísticas sobre las medidas legales adoptadas

33. Se pidió a los gobiernos que indicaran si sus autoridades competentes llevaban datos estadísticos sobre los resultados de las medidas legales adoptadas para luchar contra el blanqueo de dinero, por ejemplo, datos sobre las ganancias incautadas y decomisadas. Sólo el 39% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (por comparación con el 30% en el primer período) poseían datos estadísticos sobre el producto incautado o decomisado como consecuencia de las medidas legales adoptadas para luchar contra el blanqueo de dinero. Muchos Estados (el 50%) no poseían dicha información.

34. Varios Estados y territorios que contaban con esa información notificaron la incautación por sus autoridades competentes de grandes sumas de dinero, equivalentes a millones de dólares de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el período 2000-2001, el Ministerio Público de Australia había retenido, dos millones de dólares australianos (A\$) y la Policía Federal Australiana había retenido 17,3 millones de dólares australianos y contribuido al decomiso de 4,3 millones; en

las Bahamas se habían incautado ganancias por un valor de cerca de 16 millones de dólares de los Estados Unidos; en El Salvador, se había incautado más de medio millón de dólares de los Estados Unidos; en Estonia, se habían incautado cinco cuentas en tres bancos, con activos por un total aproximado de 10 millones de coronas estonas; en la RAE de Hong Kong de China, 1.000 millones de dólares de Hong Kong estaban incautados y pendiente de decomiso al 1º de enero de 2002; la Fiscalía Federal de México había incautado casi 300 millones de nuevos pesos y aproximadamente 35 millones de dólares de los Estados Unidos en el curso de investigaciones de casos de blanqueo de dinero; en la Federación de Rusia se habían incautado cerca de 170 millones de rublos; y en el Reino Unido se habían incautado 14 millones de libras esterlinas en efectivo en las fronteras del país entre abril de 2001 y marzo de 2002. El Brasil y Guatemala no disponían de datos estadísticos sobre la cantidad total de bienes incautados, y en Colombia y Costa Rica, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían incautado activos, incluidos vehículos, propiedades, dinero en cuentas bancarias, y otros artículos. En Colombia se habían incautado también aviones, barcos o lanchas. En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia no llevaba estadísticas aparte para las incautaciones del producto de delitos de blanqueo de dinero, sino sólo estadísticas sobre el total de incautaciones de activos en actuaciones civiles y penales.

11. Compilación de datos sobre confiscación del producto del blanqueo de dinero

35. Se invitó a los gobiernos a que indicaran si sus autoridades competentes compilaban datos estadísticos sobre el producto incautado y confiscado como consecuencia de medidas legales adoptadas para luchar contra el blanqueo de dinero. El 38% de los Estados que respondieron al cuestionario contestaron afirmativamente. Sin embargo, muchos Estados (el 43%) no poseían esa información. Gran parte de los Estados que respondieron afirmativamente notificaron incautaciones de grandes sumas de dinero, equivalentes a millones de dólares de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Australia, el Ministerio Público había recuperado un millón de dólares australianos; en el Reino Unido se habían confiscado activos por un total cercano a los 20 millones de libras esterlinas durante el período 2000-2001; en Noruega se habían confiscado casi 43 millones de coronas noruegas; y en Sudáfrica, alrededor de 1,7 millones de dólares de los Estados Unidos. En Brasil no se disponía de estadísticas precisas sobre la cantidad total de activos confiscados. En México la legislación nacional prohibía la confiscación de activos pero permitía su incautación si estaban relacionados con delitos de blanqueo de dinero.

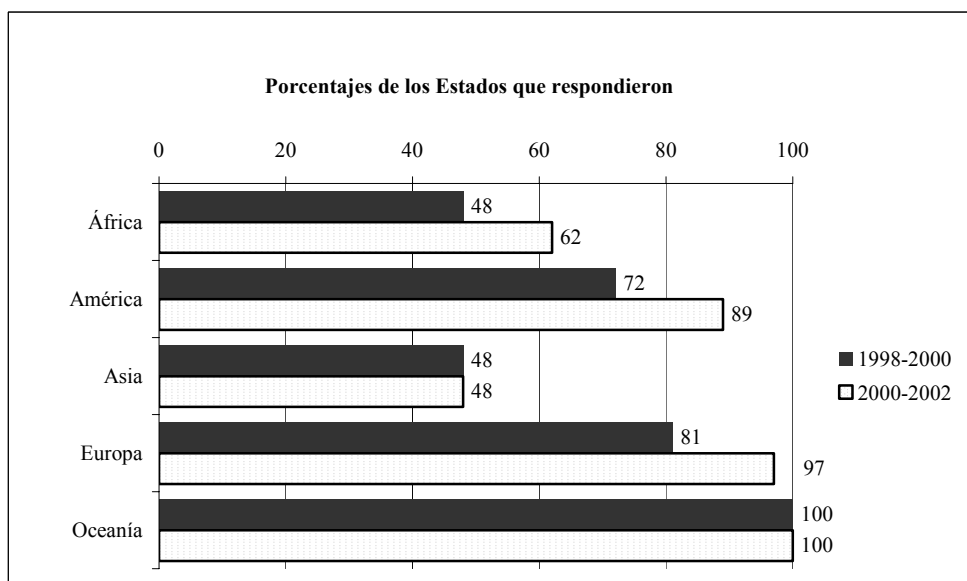
12. Tratamiento del blanqueo de dinero como delito que puede dar lugar a extradición

36. El blanqueo de dinero se consideraba como un delito que puede dar lugar a extradición en la mayoría de los Estados que respondieron en el segundo período de presentación de informes (el 75%, en comparación con el 65% en el primer período), aunque con diferentes salvedades en las distintas jurisdicciones (véase la figura IV). En algunos Estados estaba prohibida la extradición de nacionales, incluso por delitos de blanqueo de dinero. En otros Estados (el 13%), como la Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bolivia, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Egipto, Etiopía, Jordania, Myanmar, el Pakistán, el Paraguay, y Yugoslavia, el blanqueo de dinero no era un delito que podía dar lugar a extradición. El 10% de los países informantes no respondieron a la pregunta.

Figura IV

Estados en que el blanqueo de dinero se considera un delito que puede dar lugar a extradición, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



13. Prescripción en la legislación nacional de requisitos de declaración del traslado transfronterizo de dinero en efectivo cuando supera un valor determinado

37. Casi el 70% de los gobiernos que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes indicaron que sus legislaciones nacionales establecían el requisito de declarar el traslado transfronterizo de dinero en efectivo cuando la suma superaba un valor determinado. Esto representa un cambio importante con respecto al primer período de presentación de informes, en que sólo el 49% de los Estados que respondieron indicaron que sus legislaciones nacionales establecían dicho requisito. En otros Estados (el 21%) no existía este requisito.

38. Las sanciones por no declarar transacciones de dinero en efectivo iban desde multas y/o el decomiso de la totalidad o parte de la cantidad encubierta hasta el encarcelamiento. Por ejemplo, en Australia, la pena máxima por no declarar transacciones de dinero en efectivo era de dos años de cárcel o una multa. En varios Estados, entre ellos, Azerbaiyán, Bulgaria, Etiopía y Nigeria, esa infracción se castigaba con la cárcel; en otros, como Belice, Dinamarca, España, Georgia, Indonesia, Nueva Zelandia, Panamá y la República Checa, se imponían multas por las transacciones de dinero en efectivo que superaban un valor determinado; y en el Canadá la pena era el decomiso. En Bolivia y Costa Rica, el traslado de dinero en efectivo por un valor superior a 10.000 dólares de los Estados Unidos debería ir acompañado de documentación que lo justificara. En el Brasil, la sanción consistía en retener los activos que superaban el límite estipulado con el fin de verificar el origen de la cantidad. Colombia, Francia, Italia y Tailandia indicaron que, en caso de traslado de dinero en efectivo no declarado, la sanción consistía en confiscar el dinero e imponer una multa que dependía de la cantidad total confiscada. Lituania y la Federación de Rusia notificaron que el hecho de no declarar dinero en efectivo en la frontera era un delito administrativo o penal, según la suma de dinero no

declarado que se hubiera detectado. En algunos Estados, como el Canadá y Chile, se estaban introduciendo nuevas disposiciones legislativas sobre el traslado transfronterizo de dinero en efectivo. En Grecia no existían sanciones penales para esos delitos.

14. Prescripción en la legislación nacional de requisitos de declaración del traslado transfronterizo de títulos negociables al portador

39. En cuanto a la pregunta de si sus legislaciones nacionales establecían el requisito de declarar el traslado transfronterizo de títulos negociables al portador, el 45% de los Estados indicaron en el cuestionario para el segundo período de presentación de informes que ese requisito existía, (en comparación con el 31% en el primer período de presentación de informes). En otros Estados (el 40%) el requisito no existía. En la mayoría de los casos, la legislación nacional establecía requisitos de declaración del traslado transfronterizo de dinero en efectivo que también eran aplicables a los títulos negociables al portador. Al igual que en el caso de las transacciones transfronterizas de dinero en efectivo no declaradas, las sanciones variaban desde multas y/o incautaciones hasta decomiso de los títulos. En varios Estados, el traslado transfronterizo de títulos negociables al portador estaba considerado en leyes aduaneras como contrabando o violación de los controles de divisas.

B. Medidas para prevenir y detectar el blanqueo de dinero en las entidades financieras

1. Información sobre operaciones sospechosas y/o inusitadas

40. Se pidió a los Estados que indicaran si en sus sistemas financieros se habían adoptado medidas para permitir la denuncia de operaciones sospechosas y/o inusitadas. La mayoría de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (el 80%) comunicaron que se habían adoptado esas medidas, lo que supone un notable avance en comparación con las respuestas dadas en el primer período de presentación de informes (el 63%). El número de operaciones sospechosas notificadas variaba ampliamente según los países, lo que puede haberse debido a la existencia de requisitos diferentes, como la información obligatoria o de la información basada en sospechas. Por ejemplo, para el período 2000-2001, las operaciones sospechosas y/o inusitadas que se notificaron ascendieron a 7.247 en Australia; 319 en Dinamarca; 6 en la Federación de Rusia; 2.796 en Finlandia; 12.372 en el Japón; 158 en Liechtenstein; 31.251 en el Reino Unido y 1.750 en la República Checa.

41. Asimismo, se pidió a los Estados que indicaran qué empresas financieras y grupos profesionales estaban sujetos al requisito de presentación de informes. La mayor parte comunicó que estaban sujetas a ese requisito todas las empresas que participaban en el corretaje financiero y en los servicios financieros auxiliares (bancos, cooperativas de crédito, empresas de servicios financieros, compañías fiduciarias y crediticias, etc.); las que participaban en el corretaje de valores y actividades conexas; las compañías de seguros y los corredores y agentes de seguros; los casinos comerciales y las casas de juego y las agencias inmobiliarias. Por ejemplo, conforme a la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, todas las empresas comerciales y los profesionales de la abogacía estaban obligados a notificar las operaciones financieras sospechosas.

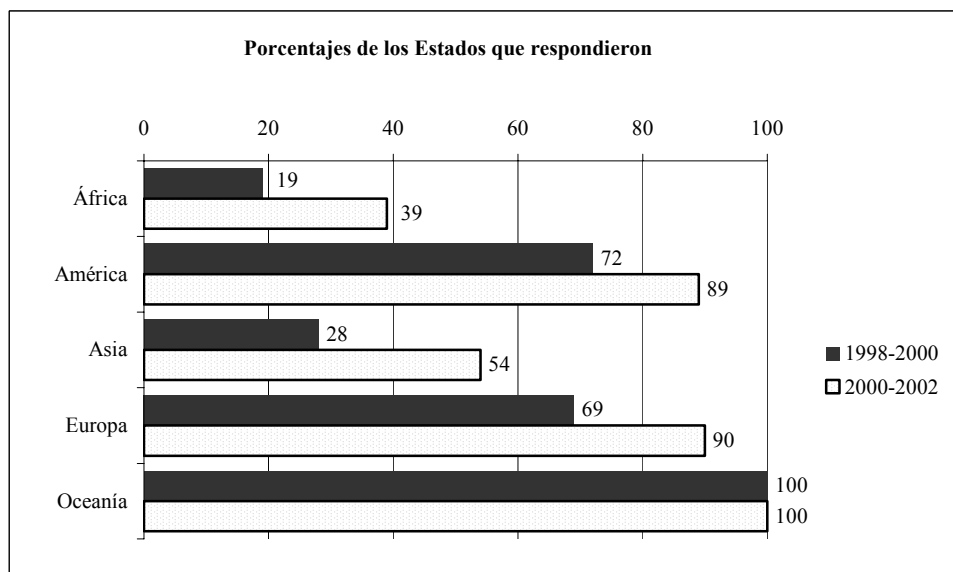
2. El Principio de “conocer al cliente”

42. Casi el 72% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes habían adoptado medidas para poner en práctica el principio de “conocer al cliente”, lo que representa un incremento considerable en comparación con el 50% que comunicó haber adoptado esas medidas en el primer período de presentación de informes (véase la figura V). Los enfoques adoptados para aplicar el principio variaban según los países. Varios Estados indicaron que habían aplicado el principio de “conocer al cliente” estableciendo políticas y procedimientos para la identificación de los clientes cuando realizaban las operaciones financieras incluidas en la lista y otras funciones conexas, y actualizando periódicamente los datos y perfiles de los clientes. Por ejemplo, en virtud de la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, los contables, abogados, casinos, negociantes de mercancías de alto valor y agentes inmobiliarios habían pasado a formar parte del sector regulado y ahora se les aplicaban los requisitos de identificación. En los Estados Unidos no existía ninguna normativa oficial para “conocer al cliente”. Sin embargo, había un entendimiento oficioso entre las empresas financieras de prestigio en el sentido de que debía examinarse más a fondo cualquiera operación sospechosa o inusitada que propusieran los clientes y se estaban elaborando normas que obligarían a las instituciones financieras a identificar a sus clientes y hacer averiguaciones sobre ellos.

Figura V

Estados que han puesto en práctica el principio de “conocer al cliente”, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



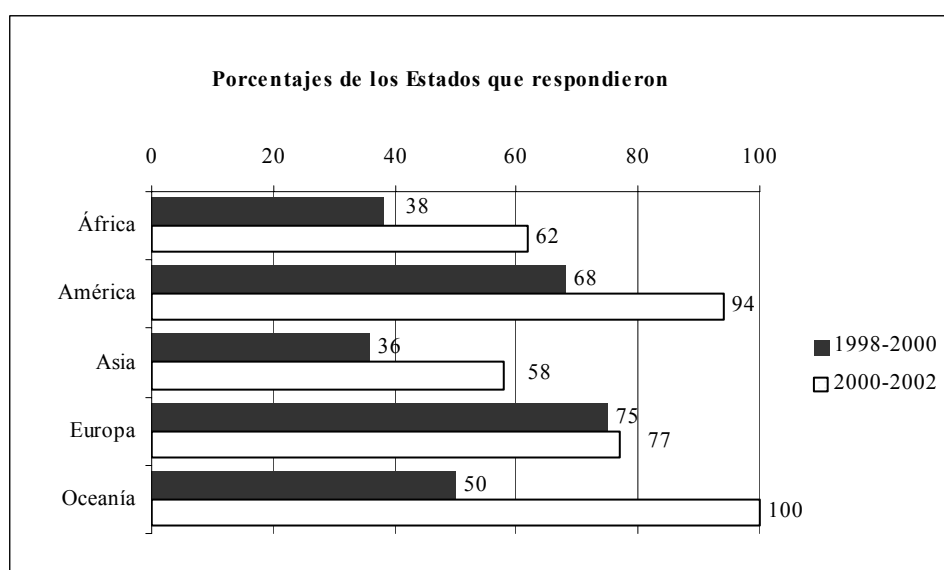
3. Eliminación de impedimentos a la investigación criminal relacionados con el secreto bancario

43. El secreto bancario ha sido uno de los obstáculos principales para las investigaciones criminales de delitos de blanqueo de dinero. Varios Estados (el 72%) que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes notificaron que habían adoptado medidas encaminadas a eliminar impedimentos a la investigación criminal relacionados con el secreto bancario véase la figura VI). Ello supone un progreso importante en comparación con las respuestas al cuestionario para el primer período de presentación de informes, en que sólo el 57% de los Estados comunicó haber adoptado esas medidas. Algunos Estados (el 12,5%) respondieron que aún no lo habían hecho.

Figura VI

Estados que han eliminado impedimentos a las investigaciones criminales relacionadas con el secreto bancario, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



44. La mayoría de los Estados informantes indicaron que los requisitos legales de informar acerca de las operaciones sospechosas invalidaban expresamente cualquier consideración comercial o de confidencialidad. En los Estados miembros de la Unión Europea, el secreto bancario quedaba suspendido cuando había sospechas de blanqueo de dinero. En la Argentina, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, la RAE de Hong Kong de China y México, las disposiciones legales relativas al secreto profesional, bancario o fiscal, y las obligaciones de confidencialidad establecidas por ley o por contrato, quedaban suspendidas si una autoridad judicial o tributaria nacional solicitaba información. Los Estados Unidos informaron de que el secreto bancario, tal como se practicaba en la actualidad, no planteaba grandes impedimentos para las investigaciones penales. Los bancos estaban obligados a facilitar registros y otro tipo de información acerca de sus clientes.

4. Identificación de los propietarios beneficiarios de cuentas

45. A este respecto, el 75% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes habían adoptado medidas que permitían la identificación de los propietarios beneficiarios de cuentas, sociedades y otros activos financieros. Sólo el 11% de los informantes no habían tomado medidas de ese tipo. En los Estados miembros de la Unión Europea, las instituciones financieras debían adoptar “medidas razonables” para identificar a los beneficiarios de cuentas. De la misma manera, las normas nacionales de los Estados Unidos exigían que las instituciones financieras adoptaran “medidas razonables” para determinar la identidad de los propietarios beneficiarios y nominales de las cuentas bancarias privadas, así como el origen de los fondos depositados en esas cuentas.

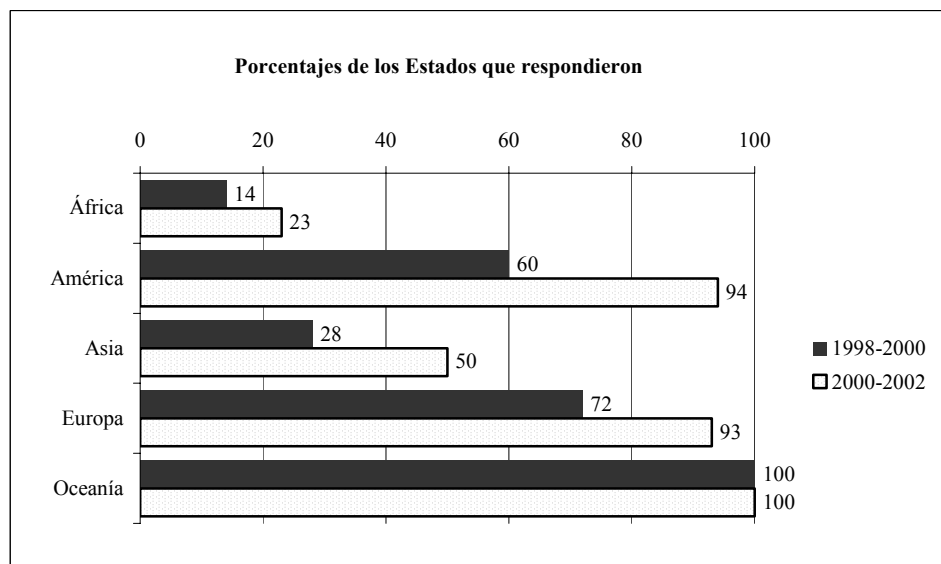
5. Establecimiento de servicios centrales de inteligencia financiera

46. Muchos Estados han establecido organismos especializados para que se ocupen del blanqueo de dinero. Un avance importante ha sido el establecimiento de más de 48 servicios operacionales de inteligencia financiera en todo el mundo, en calidad de organismos centralizados que, como mínimo, reciben, analizan y presentan a las autoridades competentes la información facilitada por instituciones financieras sobre posibles delitos de blanqueo de dinero o delitos financieros de otro tipo. Muchos otros servicios se encuentran en diferentes fases de desarrollo. Los servicios sirven de enlace entre las autoridades de represión y las autoridades financieras y normativas, proporcionando a los organismos de represión de todo el mundo un medio nuevo e importante de recopilación e intercambio de información. El 70% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes habían establecido un servicio central de inteligencia financiera para reunir y analizar informes e información confidencial sobre casos sospechosos de blanqueo de dinero (véase la figura VII). Ello indica una mejora importante con relación al primer período de presentación de informes, en el que sólo el 49% de los Estados habían establecido esos servicios de inteligencia financiera. En la mayoría de los casos, los mandatos de los servicios incluían la recogida de información y el análisis de las operaciones sospechosas con miras a detectar las actividades de blanqueo de dinero y comunicar la información pertinente a las autoridades judiciales. El Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, de la Oficina contra la Droga y el Delito, ha dedicado buena parte de su tiempo a prestar asistencia a los Estados para establecer esos servicios. Ese aspecto de la labor del Programa Mundial se ha llevado a cabo en colaboración con el Grupo Egmont, una organización internacional oficiosa que actúa como coordinadora de los servicios de inteligencia financiera. Sin embargo, hace falta un mayor esfuerzo, ya que el 20% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes aún no habían establecido ese tipo de servicios para hacer frente al blanqueo de dinero.

Figura VII

Estados que han establecido un servicio central de inteligencia financiera para reunir y analizar informes e información confidencial sobre casos sospechosos de blanqueo de dinero, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



C. Medidas para la investigación y el procesamiento en casos de blanqueo de dinero

47. El 72% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (en comparación con menos de la mitad (el 49,6%) de los que respondieron en el primer período) notificaron que habían aplicado medidas para la investigación y el procesamiento efectivos de las personas o entidades implicadas en el blanqueo de dinero. Sin embargo, algunos Estados (17%, en comparación con más del 25% en el período 1998-2000) informaron de que no habían aplicado medidas de ese tipo.

48. Un problema constante al que se enfrentan varios Estados en las fases de investigación, procesamiento y enjuiciamiento, es la falta de recursos financieros y de personal capacitado que posea los conocimientos operacionales necesarios para llevar a cabo el decomiso de activos.

49. El número de funcionarios especializados a cargo de los casos de blanqueo de dinero variaba mucho según los países. Por ejemplo, en Trinidad y Tabago había cinco funcionarios que se ocupaban de esos delitos, en Panamá había seis, en la República de Corea 60, en la Federación de Rusia 98, en Italia 426 y en Turquía 554. Varios Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes indicaron que no contaban con datos precisos, ya que los funcionarios especializados asignados a la investigación y el procesamiento en casos de blanqueo de dinero estaban repartidos entre las fiscalías y una amplia gama de organismos de represión.

50. Algunos Estados, como Bolivia, Finlandia y el Reino Unido, prestaban especial atención a la capacitación de los investigadores, fiscales y funcionarios de recaudación de impuestos especializados en delitos económicos. En Australia se había introducido un sistema informático para analizar las operaciones financieras e identificar a los sindicatos de tráfico de drogas. México indicó que la Fiscalía Federal había concentrado sus esfuerzos en el desarrollo de una estrategia integrada para planificar y orientar adecuadamente las investigaciones de casos de blanqueo de dinero. En Guatemala, una investigación sobre blanqueo de dinero había conducido en 2001 a la detención de un ex Ministro del Interior y de otras tres personas.

D. Cooperación internacional

1. Solicitudes de asistencia jurídica mutua

51. En la esfera de la cooperación internacional, se pidió a los Estados que indicaran si habían enviado a otros Estados o habían recibido de ellos solicitudes de asistencia jurídica mutua en relación con casos de blanqueo de dinero, o de embargo preventivo, incautación o decomiso de activos delictivos. Casi el 60% de los informantes notificaron que durante el segundo período de presentación de informes habían enviado a otros países o recibido de ellos solicitudes de asistencia jurídica mutua en relación con casos de blanqueo de dinero, incluidos el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de activos delictivos. Por ejemplo, el número de solicitudes enviadas en 2001 habían sido de 9 en el Ecuador, 15 en el Reino Unido, 46 en Brasil, 60 en Grecia y 91 en Finlandia.

52. En cuanto a las solicitudes recibidas, el Reino Unido había recibido 5, el Brasil 43, Grecia 58 y Finlandia 154. Varios Estados notificaron que habían adoptado las medidas de seguimiento adecuadas para responder a las solicitudes de asistencia jurídica mutua de conformidad con su legislación nacional, lo que había dado lugar al embargo preventivo, la incautación y/o el decomiso de dinero en efectivo o de activos. El 24% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes no habían enviado ni recibido ninguna solicitud de prestación de asistencia jurídica mutua en relación con delitos de blanqueo de dinero.

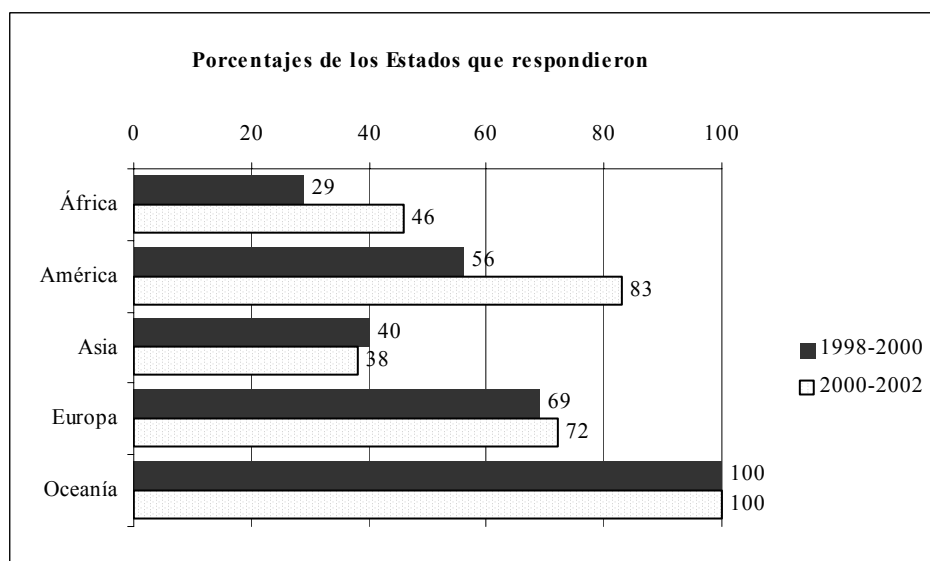
2. Firma de tratados, acuerdos y memorandos para el intercambio de información sobre el blanqueo de dinero

53. Se han hecho progresos en la mejora de la cooperación para luchar contra el blanqueo de dinero. El 60% de los Estados que respondieron al cuestionario para el segundo período de presentación de informes (en comparación con el 52% en el primer período) habían firmado tratados, acuerdos o memorandos o cartas de entendimiento con otros Estados con miras a intercambiar información financiera y/o asistencia jurídica mutua en relación con el blanqueo de dinero (véase la figura VIII). Algunos Estados (el 22%) notificaron que no habían concertado ningún acuerdo de ese tipo.

Figura VIII

Estados que han firmado tratados, acuerdos o memorandos o cartas de entendimiento con otros Estados, por regiones, 1998-2000 y 2000-2002

(Porcentajes de los Estados que respondieron en los dos períodos de presentación de informes)



54. Varios Estados notificaron la firma de acuerdos y arreglos a nivel regional y bilateral. Por ejemplo, Australia comunicó de que en junio de 2002 había firmado un memorando de entendimiento con Indonesia que proporcionaba un marco para la cooperación de los órganos de represión con el fin de prevenir, investigar, desbaratar y desmantelar actividades delictivas transnacionales que pudieran repercutir en uno de los dos Estados o en ambos. Por lo que se refiere a la cooperación policial, Bulgaria había firmado tratados con Bélgica e Italia en 2001 y con Austria en 2002. También había firmado tratados de cooperación policial con el Líbano y Francia, pero éstos no habían entrado aún en vigor. Bulgaria había suscrito asimismo memorandos de entendimiento para el intercambio de información financiera con Bélgica, la ex República Yugoslava de Macedonia, Italia, el Líbano, Lituania, Polonia, la República Checa y Rumania. El Canadá estaba negociando memorandos de entendimiento con varios otros países para el intercambio de información sobre el blanqueo de dinero y las actividades de financiación del terrorismo. Colombia había firmado acuerdos internacionales para intercambiar información financiera con Bolivia, el Brasil, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Panamá, Portugal, el Reino Unido y Venezuela. Italia había firmado 12 memorandos de entendimiento con instituciones extranjeras pertinentes para facilitar el intercambio de información relacionada con operaciones sospechosas. México había firmado 19 tratados bilaterales sobre asistencia jurídica internacional y era parte en diversas convenciones internacionales que prestan asistencia jurídica; asimismo, había firmado acuerdos para el intercambio de información financiera con los Estados Unidos, Francia y España. Panamá había firmado memorandos de entendimiento u otros acuerdos de cooperación para el intercambio de información en la investigación de operaciones sospechosas con Alemania, Bélgica, el Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, El Salvador, España, los Estados Unidos, Francia,

Guatemala, Italia, México, el Paraguay, el Reino Unido y la República Dominicana. El Perú había firmado memorandos de entendimiento con órganos extranjeros para intercambiar información financiera; el más reciente se había firmado en 2001 con la Banca d'Italia. Eslovaquia había firmado memorandos de entendimiento con Bélgica, Eslovenia, Polonia y la República Checa. Swazilandia había suscrito un acuerdo bilateral sobre asistencia jurídica mutua con Sudáfrica. El Reino Unido había concertado tratados y acuerdos de asistencia jurídica mutua con varios Estados, y además podía proporcionar asistencia jurídica a otros Estados sin necesidad de acuerdos específicos. Los acuerdos tenían un ámbito de aplicación bastante general que incluía una amplia gama de delitos, entre ellos el blanqueo de dinero.

VI. Recomendaciones

55. La Comisión de Estupefacientes debería reconocer la estrecha relación que existe entre el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas, otras formas de delincuencia organizada transnacional, y la financiación del terrorismo.

56. La Comisión debería estudiar la posibilidad de fortalecer las medidas adoptadas por las Naciones Unidas contra el blanqueo de dinero, destacando la importancia de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito prosiga su labor de lucha contra el blanqueo de dinero, en cooperación con las organizaciones e instituciones regionales y multilaterales pertinentes que participan en las actividades destinadas a dar efecto a las normas internacionales para la lucha contra el blanqueo de dinero, mediante la provisión a los Estados de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a largo plazo.

57. La Comisión debería alentar a los Estados a que participen activamente en los métodos regionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y a que canalicen las solicitudes de asistencia técnica a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o de órganos regionales de lucha contra el blanqueo de dinero similares al Grupo de Acción Financiera con miras a asegurar la compatibilidad con los mecanismos de coordinación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

58. La Comisión debería recomendar a los Estados que celebren consultas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras entidades pertinentes cuando elaboren su legislación contra el blanqueo de dinero y antes de aprobar dicha legislación, con miras a asegurar que ésta se ajuste a las normas internacionales.

59. La Comisión debería reconocer que el servicio de inteligencia financiera es una institución esencial en la que los Estados deberían concentrar sus esfuerzos de lucha contra el blanqueo de dinero.

60. La Comisión debería alentar a los Estados a que, siempre que sea posible, contribuyan a sufragar los gastos de prestación de asistencia técnica para la prevención del blanqueo de dinero.

61. La Comisión debería recomendar a los Estados que tengan presente la importancia de compartir los conocimientos que han adquirido con otros Estados en el marco de los esfuerzos mundiales por cumplir con las obligaciones dimanantes de los tratados internacionales y con las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones (resolución S-20/4 D de la Asamblea).

Notas

¹ *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 25 de noviembre a 20 de diciembre de 1988*, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.94.XI.5).

² *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, N° L.116, 28 de junio de 1991, pág. 77.

³ *Ibid.*, N° L.344, 28 de diciembre de 2001, pág. 76.

⁴ Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, *Debida diligencia con la clientela de los bancos*, Publicación N° 85 (octubre de 2001).